

La construcción social del patrimonio: selección, catalogación e iniciativas para su protección. El caso del Palacio del Pumarejo ¹

Javier Hernández Ramírez.

INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas centraremos nuestra atención sobre el fenómeno del creciente protagonismo de los movimientos sociales en la selección del patrimonio cultural. Partiremos del análisis de un caso concreto: la inclusión cautelar de un bien, la Casa del Pumarejo (Sevilla), en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía con la categoría de Monumento, tras la iniciativa y la presión social de una organización vecinal concreta: la *Plataforma por la Casa del Pumarejo*.

Del caso particular extraemos conclusiones provisionales sobre tres aspectos centrales en la Antropología del Patrimonio:

1. Los procesos y mecanismos de incorporación de bienes al Patrimonio Cultural.
2. La práctica de la catalogación como un potencial instrumento de protección integral.
3. La problemática generada por las expectativas sociales creadas ante la inclusión de los bienes en el Catálogo, y los resultados reales, inmediatos y posibles de la misma.

I. PATRIMONIO Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Hoy, cuando se habla de patrimonio cultural, es casi un lugar común señalar que los bienes que constituyen el repertorio de una sociedad o colectivo determinado carecen de un valor permanente e intrínseco. Por el contrario, se indica que el valor de éstos estriba en el significado cultural que se les otorga. Como señala Francisco Zamora Baño², una lata de sardinas hoy es sólo un recipiente; un contenedor de alimentos, pero dentro de unos siglos podría constituir un valio-

so testimonio de nuestra forma de vida contemporánea. La lata seguirá siendo la misma, sólo alterada por la *pátina* del tiempo; sin embargo, el significado que le otorgamos es distinto porque le hemos incorporado el valor de la memoria, el de la antigüedad.

El valor de los bienes radica más en el fondo que en la forma, más en el contenido que en el continente. Y este significado no es imperturbable sino que, por el contrario, es o puede ser cambiante.

Algunos bienes considerados muy significativos durante una época pueden dejar de serlo al cabo del tiempo, porque la población o sectores concretos de la misma no se sientan identificados con ellos, o incluso porque se rechacen, ya que pueden ser reinterpretados como símbolos que atentan contra valores e ideologías firmemente consolidadas o que desean imponerse como hegemónicas. Es, por poner un ejemplo, el caso del régimen Talibán de Afganistán, cuyos líderes ordenaron en marzo de 2001 la destrucción de todas las estatuas existentes en el país, incluidas las colosales representaciones pre-islámicas de Buda que, desde los siglos III y IV de nuestra era, se localizaban en las montañas del centro del país³. En este caso, la desestimación del valor patrimonial de los bienes ha supuesto la propia destrucción física de los mismos (¡con carros de combate y misiles!) en un lamentable acto de extremismo iconoclasta⁴. El decreto de destrucción fue dictado por el mulá Omar, quien se reafirmó posteriormente en su decisión con estas palabras: *“No se trata más que de romper piedras. Nada me importa aparte del Islam”*⁵. Obviamente, aquí no sólo no hay reconocimiento del valor,

sino que además se desprecia lo que se considera un episodio vergonzoso y pecaminoso de la historia afgana que debe ser olvidado.

En otros casos, los bienes pueden seguir siendo considerados referentes culturales para una población o sectores de la misma, pero su significado cultural se reelabora con el transcurso de los años o los siglos. Así, casi nadie valora hoy la Giralda sevillana -concretamente su hermoso remate renacentista- como un símbolo del triunfo del Cristianismo sobre el Islam. Para nosotros, contemporáneos, sevillanos o no, más allá de su indudable valor artístico la Giralda representa, en última instancia, a la propia ciudad de Sevilla. Es un emblema casi omnipresente en cualquier evento, en los "souvenir", guías, folletos y postales, que asociamos mecánicamente a una idea, un concepto y un sentimiento: la ciudad de Sevilla y nuestras experiencias personales e íntimas en ella.

Otras veces se incorporan nuevos bienes al repertorio patrimonial; bienes muchas veces pre-existentes, pero también de nueva factura que determinados sectores de la población (técnicos, expertos, funcionarios de la administración, políticos, intelectuales, organizaciones, movimientos sociales y otros) seleccionan como elementos de un elevado valor histórico, artístico y/o etnológico, y que pretenden activar como representativos de una sociedad o colectivo concreto.

Con todo ello quiero decir que el patrimonio cultural, por su carácter dinámico y cambiante -es decir: no inmutable ni inmanente- es una construcción social. Los bienes patrimoniales son experimentados como tales no porque contengan en sí un valor inherente o esencial e inalterable, sino porque son percibidos en un contexto social concreto como símbolos que gozan de gran valor y que comunican una determinada versión de la realidad que, a menudo, se convierte en un instrumento de reafirmación del sentimiento de pertenencia a una colectividad.

La consideración del patrimonio como construcción social exige modos de análisis que contrasten con la metodología objetual que, al concebir el bien como un objeto que contiene un valor intrínseco más allá de su contexto histórico y cultural -es decir, al descontextualizarlo y sacra-

lizarlo- centra su interés en temas como la evolución de los estilos, las formas y la estética, proponiendo leyes universales sobre el arte y el patrimonio. Así, se elude el conflicto social que se produce en la determinación del repertorio patrimonial y en la definición y formación del gusto.

Una perspectiva alternativa al enfoque objetual sería el estudio de *los procesos de selección y activación del patrimonio*, un campo de investigación central de la Antropología, que en el futuro puede generar ricos debates. Desde esta óptica, el patrimonio se interpreta en su contexto social como un proceso dinámico y dialéctico, lo que supone incorporar *la vertiente política en el análisis*.

En este sentido diferenciamos tres niveles: en primer lugar, la *determinación* de qué bienes constituyen parte del patrimonio de una colectividad; luego la *definición* de sus contenidos; y, en último lugar, la *activación* social de los mismos. En los tres ámbitos interviene casi siempre la dinámica del conflicto o la pugna entre distintos sectores rivales:

En cuanto al primer nivel, la *determinación del patrimonio*, unos sectores estiman que es necesario incorporar un bien concreto al repertorio de una sociedad por cuanto entienden que el valor social del mismo exige su reconocimiento como patrimonio colectivo. Por el contrario, otros grupos desprecian, rechazan o minusvaloran el valor del bien que se propone, al estimar criterios distintos en la determinación de lo que es patrimonio.

Por lo que respecta a la *definición de los contenidos*, unos colectivos consideran que el bien es representativo de la sociedad al poseer valores históricos, artísticos o etnológicos que reflejan una interpretación determinada de la historia y la identidad; mientras que otros, lo desestiman por no considerarlo significativo o proponen una relectura de sus contenidos de acuerdo con versiones distintas de esa historia y esa identidad.

El tercer nivel de análisis es la *activación del patrimonio*. La defensa del valor patrimonial de un bien genera una dinámica en la que sus valores apuestan por el reconocimiento social del mismo, llevando a cabo acciones específicas de presión como la reivindicación de la preeminen-

cia del carácter colectivo del bien sobre el privado, o la demanda de fondos a las autoridades públicas y la aplicación de servidumbres o limitaciones específicas a la propiedad.

En estos tres niveles es esencial el papel del Estado, que desde mediados del siglo XVIII se erige en la institución encargada de mediar en los conflictos entre lo colectivo y lo privado y, en última instancia, determinar, definir y activar el patrimonio cultural colectivo. Por ello, muchas de las demandas sociales hacia el reconocimiento del valor de los bienes considerados patrimoniales presionan a la Administración para que sancione el hecho con la tutela de los mismos, aplicando medidas legislativas y aportando recursos para su protección.

Históricamente, el criterio de grupos especializados y reducidos de profesionales (arte, estética, historia, antropología, etc.) ha sido el mecanismo más frecuente (aunque no el único) que ha operado en la selección del repertorio patrimonial de una sociedad. La autoridad científica, socialmente reconocida, ha servido para legitimar a los expertos como los únicos técnicos capacitados para determinar y definir el patrimonio y proponer medidas de activación del mismo. Como consecuencia de ello, algunas producciones significativas han sido poco reconocidas, infravaloradas o despreciadas. Sin embargo, en las últimas décadas asistimos a una creciente preocupación social por el patrimonio. Proliferan las asociaciones de defensa y/o activación del mismo y son numerosas las entidades y movimientos vecinales que incorporan en sus reivindicaciones la demanda de reconocimiento y protección de algún bien hasta entonces poco o nada valorado.

Este fenómeno habría que enmarcarlo en los procesos generales de globalización y localización (*glocalización*). En nuestra sociedad, llamada por algunos sociólogos como *del riesgo*, se teme por el deterioro del medio ambiente, por la menor seguridad colectiva, por los perjuicios de la alimentación y la medicina moderna sobre nuestra propia salud, es decir: crece la conciencia o la *reflexividad* sobre la existencia de riesgos reales que atentan contra la propia supervivencia de la especie humana. En este mundo de

riesgos globales, se teme también por la desidentificación que supone la tendencia a la homogeneización cultural fruto del proceso de globalización. Frente a etapas pasadas en las que se valoraba el progreso y el universalismo y se rechazaba lo tradicional, ya que se entendía como tosco y atrasado, hoy se extiende la preocupación por la pérdida de las costumbres, de las tradiciones y, claro está, también alarma el deterioro del patrimonio, que se revaloriza por considerarse un *refugio compensatorio* (Duclos, J.D. 1997), es decir, un referente local de la memoria amenazada al que nos aferramos⁶.

Pero hoy, más allá de esa función de soporte de la tradición en una sociedad muy globalizada, el patrimonio también es activado como un factor de cambio, como una fuerza potencialmente poderosa que se instrumenta y dirige para promover transformaciones sociales deseables. Muchas veces, la demanda de su reconocimiento y protección se enmarca en la reivindicación de la mejora de las condiciones de vida de sectores concretos, al tiempo que en una específica y alternativa versión de la historia y la identidad social.

En este contexto, los cascos históricos de muchas ciudades sufren una profunda reestructuración que tiende a homogeneizar la fisonomía física y social de los mismos. Como reacción a esta dinámica son cada día más abundantes los grupos que demandan la protección del patrimonio urbano (trazado de las calles, edificios y bienes muebles). Y lo hacen por dos razones fundamentales, que no son necesariamente excluyentes:

En primer lugar, por el deterioro de los edificios y sus bienes muebles, así como por la eliminación de amplios espacios de la trama urbana tradicional, pues todo ello supone una lamentable pérdida de la configuración espacial y física de los centros históricos. Y en segundo lugar, por la exclusión social del vecindario tradicional que, afectado directamente por la dinámica especulativa, sufre día a día la degradación paulatina de su entorno cuando no es desalojado forzada o veladamente de sus viviendas. Esto se traduce en la pérdida del sustrato social que ha sido el soporte de determinadas formas de vida hoy cada vez

más residuales, por lo que constituyen un patrimonio etnológico amenazado.

Algunas asociaciones centran sus demandas casi exclusivamente en el primer aspecto, esto es: la denuncia del deterioro del patrimonio histórico-artístico. Proponen el mantenimiento y la restauración de bienes muebles e inmuebles, jardines, sitios históricos, entramados urbanos, etc. porque son conscientes del riesgo de su pérdida y del significado que tienen como muestras valiosas de la historia y del arte. Sin embargo, cuentan con una visión restringida del patrimonio, que abarca sólo bienes materiales con una serie de características definidas: antigüedad, estética y excepcionalidad. Se excluyen por tanto otros elementos que son abundantes, tradicionales y precarios, es decir, aquellos que suelen formar parte del patrimonio etnológico y que tienen que ver con modos de vida, lugares y actividades.

Por el contrario, otras entidades demandan una protección integral u holística del patrimonio, entendido éste en su sentido cultural, incorporando la dimensión etnológica. A la defensa del arte y la historia se añade la demanda de protección de la tradición y las formas de vida. Es la visión integral de un patrimonio vivo. La *Plataforma por la Casa del Pumarejo* es un movimiento social urbano que se encuadra en este segundo nivel. Propone la conservación (restauración y preservación) del inmueble, pero también apuesta por un proyecto de revitalización cultural que dinamice los usos tradicionales y active otros nuevos de acuerdo con necesidades sociales reales.

II. EL PROCESO DE DECLARACIÓN DE LA CASA DEL PUMAREJO COMO MONUMENTO

La Casa del Pumarejo es un Palacio sevillano del último cuarto del siglo XVIII, que perteneció a la familia de Don Pedro de Pumarejo y fue transformado en vivienda colectiva o Casa de Partido a finales del XIX⁷. Desde la segunda mitad del siglo XX, el noble edificio ha sufrido un deterioro progresivo que ha hecho mella en su elegante factura y ha supuesto la pérdida o el desperfecto de algunos de sus elementos muebles más notables. Aunque este semi-abandono no parece



Figura 1. Emblema de la Plataforma que recoge un detalle de la fachada de la Casa Palacio

(Composición: Luis Hornillo y Luis Rodríguez)

Figura 2. La activación del Patrimonio constituye una inequívoca demanda vecinal. (Fotografía: David Gómez)



Figura 1. Acción de la
Plataforma por la
Casa del Pumarejo.
(Fotografía: Archivo
entidad.).

haber ocasionado problemas estructurales en el edificio, sí ha afectado a las condiciones de vida de los vecinos. En todo este tiempo la actitud de los propietarios ha sido sumamente negligente: preocupados solamente por el cobro del alquiler, y aun cuando el concepto *obras y mejoras* figura en el recibo mensual que abonan los inquilinos, no han acometido los trabajos necesarios de mantenimiento; insensibles al valor histórico-artístico del edificio, han arrendado dependencias del mismo a medianas industrias cuyas actividades han degradado los espacios comunes, al emplazarse en ellos talleres y almacenes. El resultado ha sido la pérdida de apreciados elementos ornamentales: se han mutilado balaustradas de mármol, desgajado azulejos trianeros de cuerda seca, fracturado las alambrillas que embellecían los pavimentos, además de ocasionar otros muchos desperfectos.

La situación ha empeorado drásticamente en los últimos diez años, durante los cuales el objetivo evidente de la propiedad ha sido la enajenación del inmueble, aunque para ello fuese necesario que éste llegara a un estado ruinoso. Para la consecución de dicho fin se ha llevado a cabo una clara estrategia consistente en:

1. No asumir reformas de mantenimiento del edificio: pintura, reparaciones puntuales...
2. No acometer obras estructurales: arreglo de vigas, filtraciones...
3. No permitir a los vecinos la realización de mejoras en las viviendas o sancionar estas reformas incrementando el coste de la renta, aunque sean los propios inquilinos quienes asuman voluntariamente el coste de los trabajos.
4. Abandonar el negocio del alquiler y dejar sin uso las dependencias que van quedando vacías.
5. Propiciar el deterioro de las viviendas desocupadas: las ventanas se dejan abiertas y no se reponen los cristales que se rompen, no se pinta, etc.

Con todo ello se espera provocar un cansancio en los inquilinos que precipite el abandono del edificio. No obstante, los diez vecinos

que residen en el inmueble apuestan con tenacidad por permanecer en la *Casa Grande*, como la llaman. Su voluntad es firme y ellos mismos, a pesar de que la mayoría son de edad avanzada, mantienen con dignidad en la medida de sus posibilidades las viviendas y los espacios comunes, como los corredores y los patios, que se encuentran siempre limpios, blanqueados y alegremente embellecidos con macetas. No obstante, es evidente que la actitud de la propiedad ha afectado al estado del edificio y a las formas de vida allí desarrolladas tradicionalmente. Sin nuevos contratos de alquiler, el dinamismo de otras etapas sólo existe ya en la memoria de los inquilinos mayores.

Con todo ello, el desencadenante que propició la inquietud y la organización vecinal contra el proceso de degradación del inmueble y el deterioro de la vida en la casa fue la intervención en el edificio de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Ante la denuncia de desprendimientos de diferentes elementos desde la fachada, el Departamento de Conservación de la Edificación actuó de oficio en noviembre de 1988 y, posteriormente, ordenó la ejecución de obras subsidiarias para determinar el estado del palacio (14-VII-1999)⁸. La actuación municipal originó múltiples rumores sobre la posible ruina del inmueble y especulaciones de todo tipo sobre la futura venta y transformación del edificio en hotel, casa de apartamentos de lujo, dependencia de alguna Administración, etc. Los propios inquilinos se alarmaron, por cuanto temían ser desalojados de sus viviendas como lo habían sido otros muchos vecinos del entorno residentes en corrales y otras casas de partido. El clima era de tensión y malestar. Mientras tanto, los operarios de urbanismo procedían a enlucir la fachada y a practicar calos y catas en distintos lugares del inmueble para verificar la situación estructural del palacio.

Todas estas circunstancias propiciaron la creación de la *Plataforma por la Casa del Pumarejo*. La entidad fue constituida informalmente en julio de 2000 por vecinos del entorno del barrio de la Macarena-San Gil, de procedencias y profesiones diversas (miembros de otras asociaciones, profesionales, trabajadores, jubilados, estudiantes, para-

dos...) y por inquilinos de la propia casa, que desde entonces tomaron como lugar de reunión la sede del histórico *Club Deportivo Esperanza Macarena*, ubicado desde 1957 en uno de los bajos del palacio.

El incipiente movimiento adoptó el estilo propio de las asociaciones vecinales centrando sus demandas en la mejora de las condiciones de vida de los afectados, exigiendo la reparación integral del edificio y oponiéndose explícitamente al desalojo del vecindario y a la declaración de ruina. Cartas a las autoridades, comunicados de prensa, manifestaciones y fiestas lúdico-reivindicativas fueron las acciones iniciales más frecuentes. Al poco tiempo, se incorporó una reivindicación nueva: el reconocimiento público de la Casa del Pumarejo como patrimonio cultural. La demanda se materializó en la redacción de un informe en el que se argumentaba el valor patrimonial del inmueble, que se acompañó de una solicitud en la que se instaba a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a la declaración del mismo como *Lugar de Interés Etnológico* y su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Al mismo tiempo, la otra vertiente reivindicativa continuó activa, exigiendo a la administración municipal el cierre de los calos y catas realizados en el edificio y la ejecución inmediata de las reformas necesarias. Ambas líneas de actuación perseguían los mismos objetivos: la permanencia de los vecinos, la restauración del inmueble y el reconocimiento del Palacio como patrimonio colectivo.

El 3 de julio de 2001, la Dirección General de Bienes Culturales resolvió incoar el procedimiento para la inscripción con carácter específico de la Casa del Pumarejo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. La resolución ha generado satisfacción entre el vecindario y los miembros de la *Plataforma* por cuanto consideran que se abre una vía a la solución de los problemas planteados, al reconocerse que el inmueble es un Monumento singular que, tal como contempla la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, atesora valores históricos, artísticos y etnológicos⁹.



*Figura 1. Palacio del Pumarejo.
Patio Principal (Fotografía: Juan
Carlos Pascual)*

*Figura 2. Palacio del Pumarejo.
(Fotografía: Juan Carlos Pascual).*

Lo destacado del proceso es que ha sido una entidad social independiente la que ha demandado la incorporación del bien al repertorio patrimonial andaluz, originando una inesperada dinámica de selección y activación. En el informe, y en sucesivos comunicados, la propia organización ha definido los contenidos que justifican el reconocimiento patrimonial, los cuales pueden sintetizarse en una tesis básica: que la casa constituye un testimonio vivo de la cultura popular andaluza y de sus formas de vida en las ciudades. Es decir, se resalta como valor patrimonial una versión particular de la historia de la ciudad en la que las clases trabajadoras son destacadas protagonistas. Todo ello justifica sobradamente para la *Plataforma* la intervención de la administración y la puesta en valor del bien, máxime cuando este Palacio es casi un vestigio cultural, dado que ya no existe ninguna Casa Señorial transformada en vivienda colectiva en toda la ciudad de Sevilla¹⁰.

III. LOS VALORES DE LA CASA DEL PUMAREJO. ARQUITECTURA, ARTE Y MODOS DE VIDA

En este apartado vamos a señalar sucintamente los múltiples elementos significativos que atesora la Casa del Pumarejo, para concluir que no puede protegerse y ponerse en valor adecuadamente dicho bien si el mismo no se interpreta globalmente como Patrimonio Cultural en el que se integran indisolublemente valores etnológicos, artísticos e históricos.

La Casa del Pumarejo es un singular palacio dieciochesco y un claro exponente de la forma residencial y de la sociabilidad popular urbana en Sevilla. De dos plantas, abarca una superficie total construida que supera los dos mil metros cuadrados. Aunque su transformación en casa de partido en el siglo XIX supuso una modificación de la distribución original del espacio, el edificio se estructura tal como fue inicialmente concebido en torno a dos espacios: el primero de ellos constituye la parte noble, donde se concentran los elementos constructivos y ornamentales de mayor interés histórico y artístico; y el segundo, la de servicios, en torno a un patio secundario que distribuye las viviendas interiores.

Pero más allá del mencionado uso residencial, la Casa del Pumarejo es un espacio pluri-funcional. Desde antiguo, sus dependencias han servido como talleres artesanales de distinto tipo algunos de los cuales se mantienen hoy, lo que refleja el dinamismo de un modo de vida tradicional que continúa adaptándose, aunque con dificultad, a los nuevos tiempos. La actividad comercial, que aprovecha los locales bajos que bordean al edificio, ha singularizado también a “La Casa Grande”, acrecentando el papel de ésta como centro simbólico y referencial del vecindario. Tiendas de alimentación, almacenes y tabernas se han establecido a lo largo de los años en el perímetro del inmueble dando servicio a los vecinos y acentuando el papel de la plaza y sus alrededores como ámbito privilegiado de la sociabilidad vecinal. También ha sido muy dinámica la vida cultural en el Palacio. En sus dependencias se han establecido centros de enseñanza tanto infantil como de adultos, así como estudios artísticos de distintas especialidades: artes plásticas (pintura, escultura y orfebrería), literarios (poesía y teatro) y musicales (locales donde ensayan bandas de música y grupos de *rock* y *folk*). Al mismo tiempo, distintas asociaciones han emplazado allí su sede o local social. Dada la variedad existente, los locales de la Casa del Pumarejo han constituido un foco

cultural muy creativo en el barrio, que ha contribuido a diversificar la morfología social del vecindario al convivir en el mismo edificio vecinos trabajadores con otros de estilo *bohémio* y *alternativo*. En definitiva, además de la función residencial en la propia casa se han prestado muchos servicios (comerciales, artesanales, culturales, escolares y asociativos), algunos de los cuales siguen vigentes y con gran dinamismo a pesar del deterioro del inmueble. Por todo ello, el valor de la casa trasciende a sus límites físicos pues, indisociablemente con la plaza del Pumarejo, constituye el centro social del barrio y un referente simbólico presente en la memoria colectiva del vecindario, es decir, un patrimonio del mismo.

Junto a la pluralidad de actividades que se desarrollan desde antiguo, enriquecen este bien destacables cualidades arquitectónicas y artísticas. El edificio cuenta con un indiscutible valor patrimonial que ha sido reconocido por el Ayuntamiento de la ciudad al inscribirlo en todos los catálogos del patrimonio municipal realizados hasta hoy¹¹.

La fachada es una interesante muestra del estilo característico de la arquitectura civil sevillana del siglo XVIII. Destaca la portada flanqueada por pilastras dóricas sobre pedestales, cuyas jambas están decoradas por molduras mixtilíneas



figura 3. Palacio del Pumarejo. Fachada Principal.
(Autores: Carmen Guerra de Hoyos y Juan Carlos Pascual).

y un rostro humano tallado en el centro (convertido en el símbolo de la *Plataforma por la Casa del Pumarejo*). Es también de interés la elegante balconada que se sitúa en una de las esquinas del inmueble, donde se localiza el escudo de armas de los Pumarejo.

En su interior es de gran valor el patio porticado, único en Sevilla, con falsas bóvedas sostenidas por singulares columnas y vigas de madera de caoba clara de Cuba¹². Embellecen el conjunto una serie de balaustradas de mármol labradas manualmente en talleres de la ciudad que cierran el patio, y los lienzos o paños de azulejos policromados de cuenca o arista y cuerda seca situados en los zócalos interiores, así como originales detalles decorativos en toda la bóveda del claustro. También destaca la amplia escalera por el arco lobulado de la entrada, la elevada y despejada bóveda, el notable pasamanos de madera y los ricos azulejos que decoran los escalones y las paredes. Al tiempo, las anchas y elevadas galerías o corredores que conducen a las viviendas crean un espacio ventilado y diáfano que es muy característico de la arquitectura noble sevillana. En las propias viviendas resaltan los suelos hidráulicos policromados, las puertas que se rematan con cristales traslúcidos y la propia disposición de las mismas circundando los dos patios interiores. Es de interés también el mobiliario utilizado y la decoración de las casas; porque son muestras de la organización doméstica de los espacios así como de los gustos populares.

Los propios vecinos son muy conscientes del valor histórico, arquitectónico y artístico de la *Casa Grande* y se muestran orgullosos de la singularidad de su patio principal, llamando la atención de las personas interesadas sobre sus aspectos más destacables. Al mismo tiempo, lamentan con tristeza el deterioro progresivo del edificio y evocan con nostalgia sus vivencias en el patio porticado, centro de fiestas y reuniones improvisadas. Hoy, la limpieza cotidiana, el encalado regular de los espacios comunes, la decoración con macetas llenas de geranios, jazmines o damas de noche, y el canto de jilgueros y canarios alegrando el ambiente, embellecen aún más si cabe la riqueza artística de la casa

ocultando o haciendo menos visible la degradación de esta casa tan necesitada de una urgente reforma.

Todo lo anterior nos conduce a la siguiente conclusión: que no puede valorarse aisladamente la antigüedad del edificio, la singularidad artística de uno u otro elemento, la forma de vida vecinal y su valor simbólico en el barrio. Todos estos aspectos forman parte de una misma realidad indisoluble que exige un proyecto de protección global e integral que contraste con la tradicional protección selectiva de lo artístico, lo arquitectónico y lo monumental.

En este sentido, como ya resaltamos anteriormente, lo interesante del proceso que venimos analizando es que la inscripción de la Casa en el Catálogo ha partido de la iniciativa de un movimiento vecinal, que ha presionado a la administración para que se reconozca como Patrimonio Cultural. Hasta ese momento, con el asesoramiento de técnicos municipales, se habían declarado como elementos a proteger los valores históricos y artísticos del monumento; pero se habían obviado los etnológicos. Esta omisión se debe a la concepción restrictiva del patrimonio a la que aludíamos, limitada sólo a bienes materiales concretos que reúnen los criterios cerrados de excepcionalidad, estética y antigüedad. Precisamente, la demanda de mejora de las condiciones de vida de los inquilinos y las denuncias del deterioro del inmueble han generado entre sectores concretos del vecindario la conciencia de que, en su conjunto, las formas de vida, las actividades tradicionales y el propio edificio constituyen el bien patrimonial. Esta visión comprende una interpretación holística o global del patrimonio, así como una actitud reflexiva sobre el riesgo real de pérdida de este testimonio vivo de la cultura que contribuye a definir la memoria colectiva del pueblo andaluz.

IV. LA CATALOGACIÓN COMO UN POTENCIAL INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN INTEGRAL

Si la inscripción del inmueble en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se entiende como el reconocimiento institucional de una situación objetiva y la voluntad de la

administración de poner en valor el patrimonio que representa, la operación puede contribuir decisiva y positivamente a:

1. La conservación de tan notable edificio.
2. El relanzamiento de la vida social y el restablecimiento de la función residencial del inmueble como Casa de Partido.
3. El fomento de las actividades tradicionales y de otras nuevas.
4. Perpetuar la función histórica del edificio como espacio dinamizador de la vida del barrio.

Inicialmente, la declaración de la Casa del Pumarejo como Monumento ha generado expectativas favorables entre el vecindario y en el seno de la Plataforma; sin embargo, existe un relativo escepticismo derivado de la experiencia anterior, ya que la inscripción del inmueble en todos los catálogos municipales anteriores no ha supuesto una mejora objetiva, lo cual es evidente al observar el estado de abandono y deterioro en que se encuentra. El reconocimiento patrimonial no se ha traducido hasta ahora en la aplicación de medidas de protección efectivas ni se ha acompañado de un presupuesto de subvenciones públicas con destino a la rehabilitación. Es más, tras la catalogación, incluso ha empeorado el estado del inmueble ya que no se ha asegurado el deber que tiene la propiedad de conservar y rehabilitar y sólo se ha impuesto un mayor control sobre cualquier tipo de actuación (restricciones a las reformas, prohibiciones específicas, exigencia de documentación), lo que ha sido esgrimido por los propietarios como pretexto para justificar su inactividad.

Así pues esta experiencia genera desconfianza y preocupación entre los inquilinos, que se preguntan si la inscripción de la Casa en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz mejorará el estado del edificio y favorecerá la continuidad de la tradicional forma de vida en el mismo o si, por el contrario, acelerará el lento proceso de degradación del inmueble que, definitivamente, les obligue a abandonar sus viviendas y actividades. Para evitar este extremo, la *Plataforma* propone que se reconozca la signifi-

cación etnológica del palacio y se aplique un plan de revitalización con fondos públicos para su restauración y puesta en valor a través del fomento de todas las actividades que allí se realizan y la creación de otras nuevas. El objetivo final del proyecto es que la Casa se constituya, ahora más que nunca, en centro de la vida cultural del barrio.

El debate generado por el proceso de catalogación es de gran interés teórico y práctico. La experiencia del caso que nos ocupa muestra que la labor de inventariar y catalogar no implica automáticamente la protección, entendida ésta hasta sus últimas consecuencias. Si tras la catalogación de un bien inmueble la función de la administración se limita a la imposición de servidumbres a la propiedad sin una activa tutela pública y puesta en valor real de lo que se dice proteger, las consecuencias pueden ser muy negativas.

En determinadas circunstancias, se puede producir una curiosa paradoja: que el reconocimiento del valor colectivo del patrimonio inmueble se traduzca en un detrimento del valor del bien en el mercado. La declaración formal puede inclinar definitivamente a los propietarios a optar cuanto antes por la enajenación, dadas las múltiples limitaciones derivadas de la catalogación sin contrapartidas económicas beneficiosas; y al mismo tiempo puede desalentar a futuros compradores, sobre todo si a las restricciones sobre obras y reformas se incorporan obligaciones específicas como el mantenimiento de los inquilinos tradicionales y sus contratos de alquiler de renta baja, o el fomento de las actividades culturales, productivas y comerciales. Se genera así una situación de incongruencia cuando el reconocimiento público del bien abarca los valores etnológicos, esto es: las formas de vida y las actividades, además de la arquitectura y el arte. La conclusión del proceso puede ser la ruina del inmueble y la pérdida definitiva del bien.

En otras circunstancias el resultado puede ser justo el contrario: que el reconocimiento del valor patrimonial se convierta en un valor añadido al bien dentro de la lógica de mercado, es decir, que aumente su precio. Para rentabilizar la inversión, la propiedad puede llevar a cabo una labor esteticista de restauración del edificio y de

sus bienes muebles, así como la implantación de nuevas actividades privadas y excluyentes que monopolicen los espacios (viviendas de lujo, hotel, banco, clínica, residencia de ancianos, etc.) y que neutralicen los usos sociales y tradicionales del patrimonio. En este caso, se protege el patrimonio singular histórico y artístico, pero desaparece el patrimonio etnológico que tiene un carácter representativo al aportar contenido social y cultural.

Existen otras soluciones que escapan a la lógica dominante del mercado y que merecen ser estudiadas tanto por la administración como por los sectores afectados. Nos referimos a una serie de medidas que, partiendo de la consideración del inmueble como bien de utilidad pública por sus amplios valores patrimoniales, contemplan dos alternativas que no tienen porqué ser necesariamente incompatibles: de un lado, la expropiación y la gestión pública con la participación activa del vecindario; de otro, la gestión vecinal autónoma en el marco de la economía social o *tercer sector*.

En el primer caso, la administración asegura la protección integral y regula las actividades; en el segundo, se responsabilizan de ello los propios usuarios en forma de cooperativa u otro tipo

de sociedad de gestión participativa. En ambas vías el criterio de rentabilidad no se basa en el lucro, como dicta la lógica del mercado, sino en el beneficio social que posibilitan al garantizar la continuidad de los distintos usos y de los usuarios en el inmueble.

En definitiva, la protección formal basada exclusivamente en la labor de inventariar y catalogar puede ocasionar consecuencias negativas, por mucho que la iniciativa sea bienintencionada. Si a la labor de catalogación no se incorporan medidas claras de fomento, basadas en la tutela pública y en la aportación de fondos dirigidos a la protección integral de lo que se argumenta que tiene valor, la tarea, más que testimonial como plantean algunos autores, será inútil e incluso contraproducente. Por todo ello, una protección realista del patrimonio debe contemplar un presupuesto definido que haga posible una política activa de conservación y rehabilitación que permita mejorar las condiciones de vida del vecindario¹³, así como otras medidas que contribuyan decisivamente a dinamizar las actividades tradicionales, fomentar otras nuevas y garantizar, en conclusión, la continuidad del patrimonio como un valor colectivo, vivo y en uso.

NOTAS

1. Una versión provisional de este artículo fue presentada y discutida en el Curso: Patrimonio etnológico: curso técnico sobre expedientes de catalogación, organizado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Asociación Andaluza de Antropología (ASANA). Sevilla, noviembre de 2001.

El autor desea expresar su agradecimiento a Lourdes Méndez y Elodia Hernández por los interesantes comentarios críticos que realizaron al primer borrador del texto.

2. ZAMORA, F. Ética y Patrimonio Cultural. *Boletín del IAPH*, nº. 21:37-41.

3. En especial las dos gigantescas estatuas de Buda de Bamiyan, de 53 y 35 metros, respectivamente, en las que se produce una extraña y fértil fusión entre la iconografía india y las influencias persa y griega (los rasgos son budistas clásicos del subcontinente, pero el atuendo es belénico) (El País, 27 de febrero, 2001).
4. Según el diario El País (27 de febrero de 2001), los talibán prohibieron representaciones fotográficas y pictóricas de personas. Incluso las muñecas estuvieron fuera de la ley.
5. El País, 1 de marzo de 2001.
6. DUCLOS, J.D. "Prólogo". Prats, Ll. **Antropología y Patrimonio**. Ariel. Barcelona. 1997.
7. La Casa-Palacio transformada en Casa de Partido es una forma de residencia popular dentro de la tipología de viviendas colectivas. Coincide con los corrales de vecinos en que sus moradores no son propietarios sino inquilinos, pero a diferencia de los corrales -que en la mayor parte de los casos fueron construidos para dicho uso o han sido el resultado de ampliaciones y modificaciones de anteriores viviendas- la Casa de Partido se caracteriza por ser el resultado de la transformación de un edificio nobiliario o un convento en una vivienda popular. Es, por tanto, un reflejo material de la crisis de la nobleza urbana y del clero de los siglos XVIII y XIX y de la transformación social y urbanística de Sevilla en este periodo. En comparación con los corrales, las viviendas de la Casa de Partido suelen ser de mayores dimensiones y, lo que es más importante, cada una de ellas cuenta con dependencias independientes (cocina, baño, inodoro, etc.) que no se comparten con otros vecinos.
8. Expedientes 303/88, 359/98 y 233/00 que continúa abierto en la actualidad.
9. Según el artículo 27.1 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía: "Tienen la condición de Monumentos los edificios y estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, artístico, etnológico, científico, social o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen".
10. Este no es el único caso en que el proceso de catalogación es impulsado por una entidad ciudadana y posteriormente apoyado por la administración. Como señala Rioja, C. (1999), en Andalucía existen contadas pero interesantes iniciativas populares. La autora destaca el reconocimiento oficial del valor patrimonial del Molino del Duque en Aguilar de la Frontera (Córdoba), tras las denuncias que una asociación cultural formuló sobre su mal estado y su llamada de atención resaltando el valor del bien como el único testimonio existente de un molino de diez vigas, que se encontraba seriamente amenazado.
- Las leyes del Patrimonio Histórico Español y Andaluz, así como el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, contemplan que el proceso de catalogación se puede iniciar tanto a instancias de particulares como de oficio (Art. 9.5 de la Ley 16/85, Art. 9.1 de la Ley 1/91 y Art. 9.2 del Decreto 19/1995). "La incoación del procedimiento podrá realizarse de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica" (Art. 9.2 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía).
11. El Plan General de Ordenación Urbana de 1946 es el primer documento urbanístico de la ciudad de Sevilla que se acompaña de un Catálogo de Edificios de interés histórico y artístico. En este primer documento se incluye ya el Palacio del Pumarejo. Todos los catálogos municipales posteriores (PRICA 1968, MOPRICA 1979, PGOU 1987) incorporan al bien reconociendo sus valores históricos y artísticos. La figura de planeamiento vigente que afecta al bien es el Desarrollo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla, Sector 1, San Gil-Alameda. En el documento, que fue aprobado inicialmente en julio de 2000, se realiza una catalogación sistemática de todos los edificios del sector vinculando la categoría de los inmuebles con las obras permitidas.
12. Según Passolas Jáuregui, J. Paseando por la Sevilla antigua (2000:311-12), el material de las columnas del patio es de palo campeche o maderas de Indias.
13. En este sentido algunas medidas de fomento contempladas en la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz son muy interesantes. Por ejemplo el artículo 92 indica lo siguiente: "Los estímulos y beneficios que el ordenamiento jurídico establece para la rehabilitación de viviendas podrán ser aplicables a la conservación y restauración de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, cuyas obras hubieren sido debidamente aprobadas por las actividades culturales".